

blíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, 10 de Noviembre de 1878.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por D. Ramon Portillo y Gomez, contra la Direccion de Rentas del Estado, por el cobro que le hace de cuatrocientos ocho pesos quince centavos, por rezagos y recargos de la contribucion del diez al millar; impuesta por decreto de 14 de Junio de 1861.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Ramon Portillo y Gomez, presentó escrito con fecha 2 de Junio á este Juzgado, quejándose de que la direccion general de rentas del Estado, le habia librado mandamiento de pago por cuatrocientos ocho pesos quince centavos (\$ 408.15 cents.) procedentes de la contribucion de diez al millar, decretada en 14 de Junio de 1861, sobre \$ 25.610 diferencia entre el valor de la Hacienda del Puente, porque hizo el pago en la época del impuesto, y el de 100.055 que es el

primitivo existente en los libros de avalúos de la direccion, mas los recargos de cincuenta por ciento con arreglo al artículo tercero de la ley de 14 de Junio citada, y de seis y cuarto conforme al decreto número 12 de 2 de Diciembre de 1861, con cuyo hecho, dice, se violó en su persona la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion, pues el cobro de la direccion importa el juicio y la declaracion de que con una suplantacion de valores en sus bienes, defraudó al erario una parte del impuesto mencionado; el recargo de cincuenta por ciento es una pena improcedente en este caso, y aun la declaracion de lo que debió pagar por el impuesto implicado de parte del ciudadano director de rentas, una abrogacion de facultades que no correspondian sino á las juntas calificadoras; por lo que, y habiéndose notificado que debia enterar esa cantidad dentro de tercero dia para evitar los recargos y procedimientos ejecutivos que previene la ley, pedia se decretara la inmediata suspension del acto reclamado, y previos los trámites legales se les amparase en definitiva en el goce de la garantía invocada.

Sustanciado el punto de suspension conforme al artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869; por auto de 30 de Junio se mandó suspender el embargo con que se comunicaba al quejoso en el mandamiento de la direccion; y repitiendo esa oficina su informe ya rendido con anterioridad, para justificar el procedimiento reclamado, dice: que la ley expedida por la Legislatura del Estado de México en 14 de Junio de 1861, impuso por una sola vez y como única contribucion general el diez al millar á la propiedad raiz y capitales moviliarios de 500 pesos arriba, y conforme al artículo cuarto del reglamento de la misma fecha, las bases que debian tenerse presentes para las calificaciones, eran para la propiedad raiz los valores porque pagaban la contribucion de cinco y seis al millar segun fuesen las fincas rústicas ó urbanas; que segun el decreto de 2 de Diciembre de 1872, la direccion

de rentas del Estado debe hacer la liquidación de los rezagos de contribuciones causadas desde 1861 hasta Diciembre de 1870, y proceder á su cobro con la facultad económico-coactiva; que D. Ramon Portillo y Gomez, es propietario de la Hacienda del Puente, ubicada en el Estado, cuya hacienda representaba para el pago de la contribucion de cinco y seis al millar en el año de 1861, segun los libros de la administracion, un valor de \$100,055; y habiendo este señor pagado solamente sobre \$ 74,445, resultaba á favor del erario del Estado el diez al millar correspondiente á la diferencia de \$ 25,610 en que de menos se valorizó la finca, y habiendo ademas no solo llegado sino pasado el recargo de cincuenta por ciento, conforme al artículo segundo de la ley de 14 de Junio, podia y debia hacerse el cobro usando de la facultad económico coactiva; que la direccion de rentas se habia limitado respecto del quejoso á un acto de cortesania ó de buena educacion que la ley señala como previo á todo paso ulterior, diciéndole que si como hombre honrado no pagaba la cantidad que debia hace doce años, su acreedor haria uso de las facultades que la ley le concede; y no violando ese acto ninguna de las garantías constitucionales, confiaba en que se desecharia el recurso como improcedente.

Al informe se acompañaron un ejemplar del decreto de 2 de Diciembre de 1871, una copia certificada del valúo de la hacienda del Puente que obra en el archivo de la direccion, el mandamiento librado en 31 de Mayo último y copia certificada de las partidas de entero que por contribucion de diez al millar hizo D. Ramon Portillo en los meses de Julio á Diciembre de 1861.

Es digno de notarse que por esos documentos aparece, primero: que conforme al artículo quinto del decreto de 2 de Diciembre, están condonados los recargos á los causantes que no dieron lugar á embargo, y aun verificado este debe gozar del mismo beneficio la persona que solicite la condona-

TOMO IV.—PARTE II.

ción ante el Gobierno, acreditando que otras causales y no simple morosidad le impidieron verificar el pago á su debido tiempo; de manera, que los recargos de cincuenta y seis y cuarto por ciento, están condonados para el Sr. Portillo mientras no sea embargado por el adeudo en cuestion; y para evitarlos en los términos del mandamiento, bastaría con que pagara \$256,10 y no los \$408,15 que le cobra la Direccion. Segundo: que conforme á la certificacion de enteros, el Sr. Portillo pagó \$870 por fincas rústicas, y si no poseía ó giraba otras que la hacienda del Puente, su valor para ese pago habria sido computado en \$87.000; y por último, que en el valúo que obra á fojas 22 está comprendido el *mueble de la hacienda*, es decir, computados varios objetos que no son raices, y por la misma contribucion, el Sr. Portillo pagó \$199,98 por capital moviliario.

Prevenido por el decreto de 14 de Junio de 1861, artículo sétimo, que el gobierno reglamentaría la manera de hacer efectivo el cobro del impuesto, el artículo primero del reglamento de la misma fecha, estableció en cada cabecera, una junta que denominó "calificadora," para que hiciera la cuotizacion de todo el partido. A esa junta debian ocurrir los causantes, haciendo una manifestacion de sus capitales y de la cantidad que debian pagar, segun el decreto, y si la encontraba exacta, debia anotarla de conformidad; pero en el caso contrario, decidirla la cuota que debiera pagar el causante, artículos 2 y 3. La base que debia tenerse presente para las calificaciones, era, en las fincas, los valores porque entonces pagaban la contribucion de cinco y seis al millar, y en los capitales moviliarios, los datos que tuviera la junta, artículo 4.

Si los causantes omitian hacer la manifestacion, quedaban irremisiblemente obligados á pagar la cuota que les asignara la junta calificadora, artículo 5; y concluidas las cuotizaciones, debia remitir una lista nominal de ellas al Administrador, para que este ex-

pidiera las boletas respectivas, artículo sexto. Si confrontada por los Administradores esa lista con los datos existentes en su oficina, encontraban que alguna persona de las comprendidas en el artículo primero del decreto no había hecho la manifestación, debían dar aviso á la junta para que esta le impusiera la cuota y multa que debía pagar, artículo 15; la junta debía imponer también como multa, un recargo del veinticinco por ciento á los que en su manifestación hubieran ocultado maliciosamente algunos bienes, artículo 10, y esas multas las exigía el Administrador previo aviso de la junta, que sería quien las impusiera; á cuyo efecto debía reunirse cuantas ocasiones fuera necesario, art. 11. Los causantes que no estuvieran conformes con las cuotas que les hubiere asignado la calificadora, podían ocurrir á una junta revisora establecida por el artículo sétimo del reglamento, para que esta determinara la cantidad que debían pagar, y su decisión se ejecutaría sin que quedara otro recurso. Por último, según los artículos 29 y 37 del decreto, las cuotas se dividían en partes iguales en los seis meses de Julio á Diciembre de 1861, debiendo pagarse cada una de ellas en los primeros ocho días de cada mes, y los causantes incurrir en un recargo de dos por ciento por cada día que demorasen el entero, y cuando dicho recargo llegara á ser del cincuenta por ciento, los Administradores debían proceder al cobro, usando de la facultad económico-cactiva, bajo el concepto de que del cincuenta por ciento se pagarían los gastos todos de cobranza.

De manera, que era de la incumbencia exclusiva de la junta calificadora en cada partido, designar la cuota que debía pagar cada causante; y esa designación no podía ser revisada sino por la junta establecida y en el plazo fijado por el artículo 79 del Reglamento. Suponiendo que D. Ramon Portillo no hubiera sido cuotizado, las atribuciones del Administrador, estarían reducidas á dar á la junta el aviso que previene

el artículo 15, y no podían cobrarse otras cantidades que las asignadas por la junta, y conforme al artículo 24 del mismo Reglamento, los administradores debían adjuntar á sus cortes de caja un informe especificando de los motivos porque hubieran quedado pendientes de cobro algunas cantidades, para que el Gobierno calificara si había ó no lugar á la imposición de la multa de que habla el artículo 69 del decreto. La dirección de rentas del Estado, subrogada en las atribuciones del administrador en 1861, no podía, pues, en nuestro caso ni designar, la cantidad que debió entonces pagar el Sr. Portillo, ni revisar la cuotización y entero de este señor, una vez glozadas y aprobadas las cuentas del impuesto, cuya justificación recomienda y cuida tan escrupulosamente el mismo reglamento.

Si se admitiera que el Director de Rentas actual pudiera asignar cuota á los causantes no calificados por las juntas, había carecido de objeto la existencia de estas; y pudiendo exceder las atribuciones que para la recaudación concedió el reglamento á los administradores, resultaba una inseguridad necesaria en la propiedad por las facultades ilimitadas de esa autoridad, para modificar el monto de las contribuciones causadas durante diez años. Se dice en el informe, que la dirección se ha limitado á liquidar á D. Ramon Portillo lo que debe por su hacienda del Puente; pero para esa liquidación se asienta como base, la de que el Sr. Portillo debió pagar sobre \$100,055, y ya hemos visto que la asignación de las cuotas era exclusiva de las juntas calificadoras, los causantes debían pagar las que la junta les hubiese asignado, y no puede suponerse que haya admitido el pago si no se hizo conforme á la boleta que entonces y según la calificación de la junta debió librar la administración. La liquidación se funda en la modificación de la cuota impuesta al causante, y variar esa cuota es distinto de verificar una sustracción entera entre cantidades indudables y

ciertas. Si la cuota del impuesto debía fijarse por la junta, será *rezago* la parte de esa cuota que haya dejado de pagarse, y mal se califica de moroso al deudor que verifica el pago en el término legal, según el cobro que le hizo por medio de la boleta, la autoridad encargada de la recaudación y conforme á la asignación de la cuota. ¿Era obligación del causante pedir que se aumentara esa cuota si no estaba arreglada á la base de la ley? Por otra parte, el artículo cuarto del reglamento, establece, que *la base que debía tenerse presente para las calificaciones* era, en la propiedad raíz, los valores por que entonces pagaba la contribución de 5 y 6 al millar, y en los capitales mobiliarios, los datos y conocimientos que tuviera la junta; pero si esa base debía seguirse por la junta, era inútil la calificación si los administradores pudieran separarse de ella, y ninguna de las disposiciones del reglamento, ni de la ley, establece la nulidad de los actos de la junta, sino por el contrario previene, que sus decisiones se ejecutarían sin otro recurso. Sin embargo, el C. Director hace valer en su informe, que cuando la ley señala el tipo ó la base precisa de una contribución, á ella deben ajustarse las juntas y los causantes; y por consiguiente, todo lo que en pro ó en contra del fisco se aparte de esa base, es nulo como contrario á la ley, y no produce en derecho, acción ni excepción; pero la nulidad solo existe cuando está establecida por la ley, produce acción para pedir que se declare, y excepción para oponerla, y corresponde declararla á los tribunales. Pero suponiendo que la calificación de la junta respecto de la hacienda del Puente fuese nula y debiera considerarse como no existente, no tendría facultad el C. Director para hacer por sí y ante sí la cuotización legal. Tampoco se admite, según el informe, que las faltas de las juntas en sus decisiones; obligasen al erario sin ulterior recurso; pero la parte final del artículo 79 del reglamento, dice: La decisión de la junta revisora, se ejecutará sin que

quede otro recurso. Por consiguiente, declarando ó teniendo por nula la Dirección de rentas, la cuotización á que me refiero, ni cobra rezagos propiamente dichos, ni se limita á promover la mejor recaudación de las contribuciones conforme á la fracción tercera del artículo 28 de la ley de 26 de Octubre de 1872, sino que usurpa facultades que no tiene, y destruye los derechos adquiridos por el causante, exigiendo el cumplimiento de una obligación legalmente fenecida.

Además la imposición de los recargos de cincuenta y seis y cuarto por ciento, es improcedente, porque conforme al decreto de 2 de Diciembre, solo disfrutaban de los gastos de cobranza, artículo 69, los comisionados expresos ó los administradores en los Distritos foráneos; están condonados los recargos á los causantes que no diessen lugar á embargo, artículo 59, y según el decreto de 14 de Junio de 1861, artículo 39, del cincuenta por ciento deben pagarse los gastos de cobranza.

El mandamiento de pago librado al quejoso, es una verdadera molestia, porque exige y ordena el entero inmediato, y el apercibimiento de proceder á la ejecución con la facultad económico-coactiva, establece el adeudo como indudable, es un requerimiento en forma con la conminación de multa si no se verifica el pago.

¿Violan esos procedimientos las garantías individuales? En mi concepto infringen el artículo 14 de la Constitución, porque corresponde á las atribuciones exclusivas de los tribunales del Estado, conocer de todos los casos en que se ejerza la jurisdicción contenciosa, y pertenece á esta juzgar y declarar la nulidad de la cuotización y pago verificados en 1861, porque es materia contenciosa la resolución de los derechos adquiridos por el pago aceptado, y porque exige la aplicación de la ley propia de los tribunales, juzgar la nulidad de la asignación hecha por la junta y la del pago que se supone consiguiente. El procedimiento

de la direccion; entraña el juicio de nulidad de la cuotizacion y la sentencia de segundo pago, y viola ademas la garantía constitucional porque segun el artículo citado, nadie puede ser juzgado sino por el tribunal que previamente haya establecido la ley; y conforme al reglamento de 14 de Junio, las cuotizaciones de las juntas calificadoras, solo podian ser revisadas por las juntas que estableció el artículo 97.

El uso de la facultad economico-coactiva, está reglamentado por las leyes de 20 de Enero de 1887 y 20 de Noviembre de 1888; y la primera en su art. 39 previene, que *ningunas providencias coactivas tendran lugar sino en los casos en que el derecho fiscal sea claro ó indudable*; y su art. 29 declara, que se entenderán contenciosos aquellos puntos en que fundadamente se dude sobre la aplicacion de la ley al caso particular que se verse, ó en que sean forzosas las actuaciones judiciales, como en las causas de contrabando y en las que se disfrute la paga ó adeudo de una cantidad que por su origen, por la cuota ó por la variacion de tiempos y circunstancias, ofrezca motivo fundado de dudar sobre la aplicacion de la ley. El mandamiento de pago conminando con la ejecucion, es una providencia coactiva, no obstante su cortesía, y la declaracion de nulidad que entraña y que sostiene en su informe el ciudadano Director, es contraria al artículo constitucional por si sola.

Para concluir, es de tenerse presente aunque no se invocan en el escrito de queja, que conforme al artículo 16 de la Constitucion, nadie puede ser molestado sino por orden escrita de la autoridad competente; y ya hemos visto que haciendo el cobro el C. Director, ha excedido sus facultades y usurpando atribuciones ajenas.

Por lo que el Promotor pide, se declare en definitiva conforme al artículo 102 de la Constitucion, que la justicia de la Union ampara y protege á D. Ramon Portillo y Gomez en el goce de la garantía que otorga el artículo 14 del mismo código, contra los

procedimientos de la Direccion de Rentas del Estado, reclamados en este recurso.

Otro si digo: que debe mandarse reponer con el sello correspondiente el papel del sello quinto de que se ha usado en estas actuaciones.

Cuernavaca, Julio 11 de 1873.—*Nicolas Medina*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Julio 19 de 1873.—Visto el recurso de amparo intentado por D. Ramon Portillo y Gomez contra la Direccion de rentas del Estado, por el cobro de cuatrocientos ocho pesos quince centavos \$408.15, que en liquidacion de rezagos dijo debia Portillo con los recargos del cincuenta y seis y cuarto por ciento sobre la diferencia de veinticinco mil seiscientos diez pesos \$25.610 del legítimo valor de la hacienda del Puente, propiedad de Portillo, quien á la Administracion de Rentas de este Distrito solo satisfizo, por la única contribucion de diez al millar impuesto por el decreto número 10 de 14 de Febrero de 1861, sobre la base de setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos \$74.445, y no sobre la de cienmil cincuenta y cinco pesos \$100.055 legítimo precio de esa finca; fundándose la Direccion para hacer este cobro en el deber que le impone el artículo 19 del decreto número 12 de 2 Diciembre de 1871 de liquidar los adeudos por rezagos de contribuciones desde el referido año de 1861 hasta Diciembre de 1870; á lo que contesta Portillo no deber nada, pues su hacienda pagó á su debido tiempo todas las cuotas que le fueron designadas por la junta liquidataria, con total arreglo á la citada ley de 14 de Junio de 1861, sin quedar á deber absolutamente nada, para que se pueda decir que hay un adeudo rezagado; y que aun cuando lo hubiera, ó mejor dicho, aun cuando la junta lo hubiera cuotizado sobre base me-

nor que el valor de sus fincas, tal cuotización hoy no podría alterarse por ser cosa fenecida y ejecutoriada, según el artículo 9 del reglamento de la ley citada; por lo que con este cobro que la Dirección le hace, que no es de pago retardado, sino de entero de cantidad que se supone defraudada, se violan al causante las garantías que otorga la Constitución federal en su artículo 14, donde ordena que "nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por las leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por el tribunal que previamente haya establecido la ley." Visto el nuevo informe documentado de la Dirección; lo pedido por el C. Promotor fiscal; la ley del Estado de México de 14 de Junio de 1861 y su reglamento de 14 de Julio del propio año, con lo demás que convino.

Considerando: que según las minuciosas prescripciones, severas penas y precauciones de la citada ley y reglamento, no era fácil una ocultación de parte tan considerable del precio de una finca tan conocida como la hacienda del Puente, de la que tenía los avalúos la Administración de rentas para el cobro de la contribución del cinco y seis al millar, sobre cuya base se mandó cobrar la única del diez al millar, y por cuyo pago se mandó recibir como compensación, aun las cantidades que los causantes hubiesen enterado por el préstamo forzoso del decreto de 6 de Marzo de ese mismo año de 1861.

Que una vez cumplidos los requisitos de la repetida ley, glosadas y aprobadas las cuentas de esa contribución, sin reclamo alguno relativo á los bienes de Portillo, aun suponiendo favoritismo, muy difícil, en la base porque se lo cobró, no quedó ulterior reclamo según el final del artículo 19 de la ley número 12 de 2 de Diciembre de 1871, no podía comprender las operaciones arregladas á la número 10 de 14 de Junio de 1861, mandando reservarlas, sin incurrir en el vicio de retroactividad, que lo haría

nulo, y con el que se viola el artículo 14 constitucional.

Que el referido artículo 19 al mandar liquidar adeudos por rezagos, no ha querido se cuoticen valores que se crean ocultos á personas y oficinas á quienes por tener constancias de ellos no podían ocultarse, como era la Administración de rentas del Distrito y Contaduría general del Estado que glosaba y aprobaba las cuentas, donde paraban los avalúos de las fincas rústicas y urbanas, base de las contribuciones; que estos mismos datos de las oficinas y el aliciente del quince por ciento de los valores ocultos á cualquiera denunciante de ellos, con las demás penas al ocultante y cómplices, impedían un notable favoritismo y facilitaban su descubrimiento, por lo que no es de creerse lo haya habido en la cuotización de la hacienda del Puente, sino que consideraciones de otra especie harían tal vez que se fijase esa base, como acaso la de ser Portillo, según dice serlo, acreedor al Estado, tener anticipado el total monto del préstamo forzoso y segregar de su moviliario en la citada finca las herramientas y enceres de la labranza, fijándolo solo en el ganado y reatas, como era justo: por lo que con la cuota que hoy se le exige de adeudo rezagado que no hay, y en que aparecen recargos no debidos, se violan las garantías del artículo 14 referido, atendido lo cual, y con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869, se declara; Primero: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Ramon Portillo y Gomez, contra el cobro que por adeudo de contribuciones rezagadas le hace la Dirección general de rentas del Estado, pues con él se violan las garantías que otorga el artículo constitucional citado. Segundo: notifíquese al interesado y hágase saber al C. Promotor, previniendo al primero reponga doce hojas del sello tercero por igual número del sello quinto invertido en este juicio, pagando así mismo en papel el último suplido por este Juzgado. Tercero: publíquese este fallo en la forma acostumbrada, y elévense

las actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision. Así definitivamente juzgando, lo proveyó y firmó el C. Mariano Sansalvador, Juez interino de Distrito del Estado de Morelos.—Doy fé.—*Mariano Sansalvador.*—*José Antonio Rego, secretario.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 17 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por D. Ramon Portillo y Gomez, contra la direccion de rentas del Estado, por el cobro que le hace de cuatrocientos ocho pesos, quince centavos \$ 408.15 cents., por rezagos y recargos de la contribucion del diez al millar, impuesta por decreto de 14 de Junio de 1861, que dejó de pagar por la diferencia de veinticinco mil seiscientos diez pesos \$ 25.610, entre el valor real de la hacienda del Puente de su propiedad, que es el de cien mil cincuenta y cinco pesos, \$ 100055, y la cantidad de setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, \$ 74.445, sobre la cual habia estado pagando únicamente el referido impuesto, cuyo cobro, segun ha informado el C. Director de rentas, se ha hecho con total arreglo á la ley de 2 de Diciembre de 1871, que por su artículo primero le ordena liquidar los adeudos por rezagos de contribuciones, desde 1861 hasta Diciembre de 1870; en tanto que el quejoso, considera este procedimiento como atentatorio á la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion federal, pues que el mandamiento de pago librado por la direccion de rentas, importa un juicio y la declaracion de que ha cometido un fraude contra el Erario, é impone una pena, la del cincuenta por ciento de recargo, sin ser dicha oficina un tribunal previamente establecido por la ley, para tener la facultad de juzgarlo y castigarlo, y considerando: que no es

tá probada ni hay fundamento para creer, que la direccion de rentas haya considerado la liquidacion practicada por ella, y el mandamiento de pago que expidió, como una sentencia en toda forma, ejecutoria en todo caso, y cuyas declaraciones no tuvieren ninguna facultad de revocar los tribunales ordinarios; sino que hasta ahora aparece, que esa oficina se limitó simplemente y en cumplimiento esacto de la ley, á hacer la computacion de lo que aparecia deber Portillo y Gomez, y á exigir su pago; pero sin negar en manera alguna que sus procedimientos, en caso de reclamacion, debieran quedar sujetos á la revision judicial; que mientras esta negativa no exista, rehusándose á reconocer la competencia de los tribunales, para conocer en juicio de sus procedimientos, no se puede afirmar que la direccion de rentas se haya arrogado facultades judiciales que no le corresponden, con infraccion del artículo 14 de la Constitucion de la República; y con fundamento del artículo 101 de misma, se decreta:

Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Morelos en 19 de Julio de este año, que declaró haber lugar al amparo.

Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Portillo y Gomez contra el cobro de la cantidad de cuatrocientos ocho pesos que le hace la Direccion de rentas del Estado, por rezagos y recargos de la contribucion de diez al millar.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes hágase saber, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Ateaga.*—*Pedro Or-*

dar.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Ausa.—Simon Guzmán.—Luis Velásquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia. México, Octubre 30 de 1873.
Enrique Landa, oficial mayor.

COMPETENCIA.

Promovida entre el Juzgado sexto de lo civil de México y el Tribunal de primera instancia de Zacatlán para conocer del juicio que D. Antonio Mier y Celis sigue contra los herederos de D. José María Leon y Sosa, sobre pesos.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que el Tribunal de primera instancia de Zacatlán ha promovido competencia al sexto de lo civil de México, para conocer del juicio hipotecario que D. Antonio Mier ha promovido contra los herederos de D. José María Leon y Sosa sobre pago de la cantidad de veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos sesenta y dos centavos.

El conflicto jurisdiccional se formó de la manera que sigue: D. Antonio de Mier con fecha 8 de Enero próximo pasado, se presentó al Juzgado sexto de lo civil de esta Capital, demandando á los herederos de Sosa, y deduciendo su acción de una escritura pública de reconocimiento, la cual obra á fojas 1 y siguientes del cuaderno principal. El actor en su escrito de demanda, solicitó también se librara exhorto á Zacatlán y Tulancingo, emplazando á los demandados; y habiéndose decretado de conformidad, los exhortos fueron librados, y á su vez también cumplimentados así por el Juez de Tulancingo, como por el Tribunal de primera instancia de Zacatlán.

Los demandados comparecieron por medio de un apoderado á contestar la demanda; y al hacerlo, pidió que al librarse la cédula hipotecaria se citara á D. Manuel Orta, D. José María Herrero y D. Juan Soto para que se presentaran á dicho Juzgado sexto, á defender su derecho. Dicho Juzgado por auto de 19 de Febrero, mandó expedir la cédula hipotecaria, y que se hicieran las notificaciones pedidas, librando al efecto exhorto al Tribunal de primera instancia de Zacatlán, que es donde residían los señores Orta, Herrero y Soto, y donde están ubicadas las fincas que se perseguían. Recibiendo dicho exhorto el Tribunal de Zacatlán, no procedió á fijar la cédula hipotecaria y citó á Orta, Herrero y Soto, de los cuales, el primero y los otros dos comparecieron al Tribunal para que iniciara competencia, como lo hizo con fecha 17 de Febrero. Las razones en que se apoya el Tribunal para reclamar el conocimiento de este negocio, son las dos siguientes: primera; los herederos de D. José María Leon y Soto como labradores, no han podido renunciar á su fuero según lo dispuesto en las leyes 6 y 7 tit. 11 de la Novis.; segunda; los citados herederos están domiciliados en el Distrito de Zacatlán. Los Señores Herrero y Soto alegan en apoyo de la propia jurisdicción, el fuero *ratione rei sitæ*; y el ser ellos actualmente dueños de dos de las fincas que se han mandado secuestrar.

El Juez sexto de lo civil aceptó la competencia, y se apoya en los fundamentos siguientes; primero: que este es el lugar del contrato. L. 32 vers. La sexta tit. segundo Part. tercera; segundo: el demandante y los demandados, han reconocido la jurisdicción de este Juzgado, y esto basta para fundar su competencia (L. 32 cit. vers. La novena y artículo 228 del Código de Procedimientos); tercero: este es el lugar designado para la ejecución del contrato, con renuncia de cualquiera otro fuero, (L. 32 cit. L. 7 tit. 29 lib. 11 de la Novis). Siendo de notar que hoy es muy inconducente citar como